

REVISTA DE DERECHO

AÑO XXIV – OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1956 – N.º 98

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

CONSEJO CONSULTIVO:

ROLANDO MERINO REYES
ALEJANDRO VARELA SANTA MARIA
JUAN BIANCHI BIANCHI
QUINTILIANO MONSALVE JARA
MARIO CERDA MEDINA
ESTEBAN ITURRA PACHECO



ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA – CONCEPCION (CHILE)

RAMON DOMINGUEZ BENAVENTE

Abogado y Profesor de Derecho Civil

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO EN EL CODIGO CIVIL

1.—**Razón de haber elegido este tema.**—Me voy a referir en esta charla al Derecho Sucesorio como fue concebido por don Andrés Bello; tal como yo lo entiendo. Trataré de penetrar superficialmente, como corresponde a una exposición que es de vulgarización de una parte del Código Civil, en las ideas fundamentales que tuvo en vista el ilustre autor de nuestro principal cuerpo de leyes al concebir la reglamentación acerca de la sucesión por causa de muerte.

En esta hora en que se celebra el Centenario de la promulgación y vigencia del primero y más importante de los Códigos de la República, me ha parecido muy justo y muy oportuno recordar esta parte de la obra de Bello, desde que fue por la que comenzó a trabajar.

Bastará recordar que en la edición de "El Araucano", del 21 de Mayo de 1841, se empezó a publicar el Proyecto sobre "La sucesión por causa de muerte". Se dijo en esa edición: "Los trabajos de la Comisión de Legislación han principiado por la parte del Código Civil que debe tratar "De la sucesión por causa de muerte", ya porque sobre esta materia se le presentaron materiales preparados de antemano por uno de sus miembros, y ya por haberse creído que era ésta la parte más defectuosa de nuestra legislación civil".

Por mi parte, pienso, con el autor del Código, que "acaso ningún ramo de la legislación ejerce un influjo más directo y trascendental sobre la dicha y el sosiego de las familias que las leyes que reglan la materia de sucesiones. Decir que el legislador puede sacar de ellas un gran partido para la disciplina de las familias, para la pureza y ternura de los afectos domésticos y para la felicidad conyugal; decir que ellas rodean de consuelo el lecho del moribundo y velan sobre la integridad y conservación de los patrimonios, es sólo dar una ligera idea de su importancia, idea bastante, sin embargo, para que veamos en ellas el más importante complemento de las disposiciones legales relativas a la traslación del dominio" (1).

2.—Ubicación de la materia en el Código.—Después de haber tratado el Código Civil, en el Libro I, el derecho de familia y el derecho de la personalidad, ramas muy importantes del Derecho Civil, y en el siguiente el derecho de los bienes, parte fundamental del Derecho Patrimonial —la otra gran división del estudio del Derecho Civil—, se ha destinado el Libro III a la sucesión por causa de muerte, es decir al Derecho Sucesorio, desde que su estudio no forma parte propiamente del derecho de los bienes, como se afirma por Claro Solar (2), sino que es más bien la coronación tanto del derecho de propiedad como del Derecho de Familia, que son sus supuestos necesarios.

3.—Justificación del sistema.—Al destinar el autor del Código un libro especial al Derecho Sucesorio —posterior al que dice relación con el Derecho de Familia y al que trata de los Bienes—, procedió con toda lógica, porque si bien tanto en el uno como en el otro encuentra apoyo la sucesión mortis causa, no es menos cierto que se trata de un instituto con características especiales.

Aunque el artículo 588 considera a la sucesión como uno de los modos de adquirir el dominio, lo que habría justificado su ubi-

(1) "El Araucano", año 1839.

(2) Claro Solar, Luis: "Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado", Tomo XIII, N.º 1, página 9.

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

563

cación en el Libro II, junto a otros modos —ocupación, accesión y tradición—, la verdad es que no siempre la sucesión mortis causa se presenta como un modo de adquirir.

Si la vocación para suceder proviene del testamento del *de cuius*, y se trata de un legado, esto es, de un llamamiento a título particular, la sucesión no es un modo de adquirir, salvo cuando se trata de un legado de especie, de una cosa singular, cierta e individualizada. En los demás casos, cuando el legado es de género, el sucesor no adquiere el dominio de la cosa legada por sucesión por causa de muerte, pues en tal situación sólo tiene un derecho personal, un crédito contra el heredero o el obligado a la prestación del legado, de tal manera que la adquisición de la propiedad opera sólo cuando se le hace la entrega, mediante la tradición.

En este punto la doctrina pone un acento especial. Así, Planiol enseña lo siguiente: "Cuando el legado no tiene por objeto un derecho real sobre un cuerpo cierto, no le pertenece al legatario la acción real, sino que tiene una acción personal, contra los herederos u otras personas deudoras del legado. Esta acción, que los antiguos llamaban *actio ex-testamento*, nace contra la persona del heredero por el solo hecho de su aceptación" (3).

Conviene agregar, además, que el derecho de herencia a que da origen la sucesión por causa de muerte, se otorga con abstracción de que en el hecho importe o no una adquisición de dominio por parte del heredero, desde que el difunto ha podido no tenerlo. Como lo expresaba Gayo: "La herencia existe aunque positivamente nada signifique para el heredero", pues "comprende, sin duda, también la herencia gravosa; porque es palabra jurídica, como la de posesión de los bienes", según lo enseñaba Pomponio.

Pero hay más: la sucesión mortis causa es también una forma de contraer obligaciones, más que un modo de adquirir bienes, pues dentro del concepto que de ella se tiene por nuestro Derecho —en que el heredero recoge el patrimonio del difunto o una cuota-parte del mismo—, lo que le da carácter a la sucesión es que el heredero no solamente adquiere los derechos del causante sino también, y esto principalmente, que se hace responsable personal

(3) Planiol, Marcel: "Traité Élémentaire de Droit Civil", Tomo III, N.º 2789, página 763. París, 1937.

e ilimitadamente de las deudas del finado. El artículo 1097 así lo dispone.

Por eso es posible que exista sucesión respecto del patrimonio de un insolvente que ha fallecido, que no ha dejado tras de sí sino deudas. Con términos propios de la estilística latina, decía Pomponio: "La herencia, aunque no tenga bienes corporales, tiene significación en Derecho". No podría decirse, en esta situación, que verdaderamente la sucesión sea un modo de adquirir. Y ello, como ya lo he insinuado, por la especial circunstancia de que la herencia sigue siendo por el Código, al igual que en el Derecho Romano, un *nomen juris*, independientemente de que ella se traduzca en un resultado positivo para el heredero.

Y una última observación: La sucesión mortis causa no solamente da origen a la adquisición del dominio de los derechos reales del causante —la propiedad— sino que, además, hace ingresar al patrimonio del heredero los créditos que el de cuius tenía. En este caso la sucesión es un modo de adquirir créditos, si bien es cierto que, según el sistema del Código, sobre los derechos personales se tiene también una especie de propiedad (artículo 583).

Se juzga, pues, muy ligeramente cuando se afirma que la sucesión por causa de muerte tiene una ubicación inadecuada en el Código. Traigo a colación, para juzgar de la bondad de la colocación de esta materia en el Código Civil, las expresiones tan elocuentes de Vittorio Polacco, notable civilista y profesor insigne de la Universidad de Roma, quien decía —criticando en esta parte al derogado Código de Italia de 1865, que trataba de la sucesión por causa de muerte en el Libro III, entre las formas de adquirir y transmitir la propiedad y demás derechos sobre las cosas—, lo siguiente: "La colocación es desgraciada, en primer lugar, porque con la sucesión se transmiten también acciones de crédito además de la propiedad y de los derechos in re aliena, y después, porque el oficio de la sucesión hereditaria no se limita a esto; antes bien, la adquisición y la transmisión de bienes es, como sabemos, accidental y no esencial al concepto de la sucesión, subsistiendo la herencia como ente de por sí, hecha abstracción de los bienes que eventualmente pueda haber, esto es, aun cuando no haya derechos y sustancia activa que el heredero adquiera". "Mucho mejor —agre-

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

565

ga— han hecho aquellas legislaciones que, siguiendo el método de los modernos pandectistas, han asignado a las sucesiones una parte especial" (4).

Yo pienso que estas expresiones son un elogio muy merecido al autor del Código Chileno, aunque el profesor Polacco no haya tenido en vista al emitirlas la obra imperecedera de Bello, elaborada en este país tan apartado de la vieja Europa.

Conviene recordar, aunque sea por vía puramente informativa, que códigos más modernos reglamentan en un libro especial el Derecho Sucesorio. Así, el Italiano de 1942 le dedica el Libro II; y el Peruano de 1936 destina a esta materia el Libro III, después del "Derecho de las Personas" y "Del Derecho de Familia".

4.—Concepto y fundamento del Derecho Sucesorio.—Por Derecho Sucesorio se entiende el conjunto de normas jurídicas destinadas a regular la suerte del patrimonio de una persona con posterioridad a su fallecimiento.

El Derecho Sucesorio es una rama importante del Derecho Privado. Es ajeno a él todo lo referente a las relaciones de Derecho Público de la persona difunta. Es solamente el patrimonio del de cuius del cual se ocupa el Derecho Sucesorio.

Pero no siempre ha permanecido limitado a la esfera patrimonial. Se sabe que el punto de partida del Derecho Sucesorio Romano fue la *sacra familiae*, de manera que el traspaso del patrimonio del difunto era tan sólo algo accesorio del fenómeno ligado con aquélla. Esto explica —como lo afirma Binder— que la sucesión romana, en los primeros tiempos, era como *successio in universum ius defuncti* (5).

El gran romanista Pietro Bonfante, en su magistral "Historia del Derecho Romano", enseña que, en el Derecho Quiritario y en el mismo ordenamiento de las XII Tablas, la herencia primitiva no tuvo la finalidad de transmitir el patrimonio, sino la de transmitir el vario complejo de poderes que constituyen la soberanía sobre la familia, concebida ésta como organismo político. Fue sólo poste-

(4) "De las Sucesiones", Tomo I, página 14.

(5) Binder, Julius: "Derecho de Sucesión", Editorial Labor, 1953, 2.ª Edición.

riormente, bajo el período del Derecho Clásico, cuando la sucesión perdió su carácter primitivo, esto es, de transmisión de la soberanía doméstica, adaptándose a los nuevos fines, de carácter esencialmente patrimonial, que es el que tiene en las modernas legislaciones, como ocurre con el Código Civil Chileno.

Su fundamento hay que encontrarlo, hoy en día, en la necesidad que siente toda sociedad jurídicamente organizada, de que las relaciones de derecho de una persona no terminen con su muerte, sino que ellas se mantengan en poder de otra u otras personas que le vienen a suceder, pues "no sería posible un régimen jurídico que dispersara el patrimonio de los que mueren o que negara valor a las obligaciones contraídas durante la vida de los causantes" (6).

5.—Derecho Sucesorio y propiedad privada.—Desde que el Derecho Sucesorio regula la sucesión en el patrimonio de un difunto, presupone una organización de la economía en que se reconozca la propiedad privada, pues propiedad privada y Derecho Sucesorio son conceptos que se requieren mutuamente. Sería vana ilusión reconocer el Derecho Sucesoral si antes no se ha establecido un sistema de propiedad que le permita a su titular disponer de ella para después de sus días.

Resulta así que las reglas acerca del Derecho Sucesorio vienen influenciadas por las ideas que se tengan del derecho de propiedad. Como lo anota Menger (7), el derecho de sucesión no es más que una extensión de la propiedad privada más allá de los límites de la vida humana, y el destino de estas dos instituciones se encuentra estrechamente ligado. Mientras el derecho de propiedad regula el presente, el Derecho Sucesoral mira hacia el porvenir y perpetúa, en cierta medida fundamental, la estructura social de un pueblo. La diversidad de ideas políticas y sociales se refleja en la reglamentación del Derecho Sucesorio, como consecuencia del tratamiento que se le haya dado al derecho de propiedad. Toda idea política y económica que amengue el derecho de dominio repercute en el Derecho Sucesorio.

(6) Martínez Paz, Ernesto: "Introducción al Derecho de la Sucesión Hereditaria", N.º 2, página 40.

(7) "El Derecho Civil y el Proletariado", página 172.

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

567

No creo oportuno discutir si el sistema de que los bienes de un difunto pasen a sus sucesores, en lugar de quedar en la colectividad, sea conveniente o no. El hecho cierto es que todavía no se ha dictado una legislación que lo haya suprimido del todo, por mucho que algunas le hayan hecho una tala considerable.

Si —como lo afirma Cosentini (8), apoyado en Menger— la propiedad es un concepto eterno que no desaparecerá jamás completamente de la vida social de la humanidad, debe concluirse de ello que el derecho de sucesión, que se relaciona tan estrechamente con el sistema de la propiedad privada, no podrá ser jamás completamente abolido.

Por mi parte, suscribo gustoso las expresiones de Colin y Capitant, en cuanto afirman que "los teóricos que lo atacan, realizan una obra vana y pueril" (9).

Reconocido por el Código Civil Chileno el carácter perpetuo del derecho de dominio, que dura mientras existe la cosa sobre la cual se ejerce, no podía por menos que aceptar el principio de que el derecho de propiedad se trasmite del propietario que fallece a sus herederos o legatarios. La propiedad no sería un derecho perpetuo, si ella terminara con el propietario.

6.—Importancia del Derecho Sucesorio.—La importancia de las reglas acerca del Derecho Sucesorio son enormes, no tan sólo por el hecho de que en la práctica dan origen a un gran contingente de pleitos o litigios, sino, y es lo más fundamental, porque el influjo de ellas en la cohesión del grupo familiar, en la felicidad de las familias, en la conservación del patrimonio, en el mantenimiento de un sistema económico determinado, son incalculables.

En efecto, en el Derecho Sucesorio el legislador parte de una determinada concepción moral, enderezada a alcanzar una finalidad económica y política que es en esencia lo fundamental. La técnica jurídica en la construcción de la ley está al servicio de esa concepción y finalidad. Interesa, bajo este punto de vista, poco o nada el estudio desde muy cerca de la ley, si antes no se ha tenido

(8) "Reforma de la Legislación Civil y el Proletariado", página 560.

(9) "Derecho Civil", Tomo VII, página 6.

el buen cuidado de precisar la orientación general del Derecho Sucesorio en un país determinado.

Resulta, entonces, que la legislación sobre el Derecho Sucesorio reviste una especial importancia, pues es por medio de ella como el poder público más ejerce su misión, orientadora de la sociedad, en el orden del Derecho Privado, hacia fines determinados, en lo político y en lo económico. Así, si el legislador quiere una sociedad organizada en principios democráticos, pues nada más útil que terminar con el privilegio de conservar los bienes dentro de una misma familia, poniendo fin al sistema de que los bienes, en ciertos órdenes sucesorios, vuelvan obligadamente a los parientes de la línea de donde esos bienes habían llegado al difunto.

La organización familiar y el poder del Estado, la primera hoy en día cada vez más debilitada, y el poder del segundo cada vez más absorbente, es natural que han dejado su huella en el Derecho Sucesorio. Con razón ha podido afirmar Ernesto Martínez Paz, en su obra "Introducción al Derecho de la Sucesión Hereditaria", que "la aristocracia y la democracia, el liberalismo y el autoritarismo, el comunismo y el sindicalismo, cada una de las concepciones de vida social, tienen a su servicio un régimen de propiedad y un sistema peculiar de sucesión hereditaria".

Siendo el Código Civil uno de los tantos denominados Códigos burgueses, que se promulgaron en el siglo pasado, es natural que haya partido de una concepción moral un poco distinta de la que se tiene en la actualidad. Y es lógico que la evolución de esa concepción, para bien o para mal, ha dejado sentir su influencia de una manera ya bastante notoria.

7.—Las fuentes.—El autor del Código se encontró en esta materia con una heterogeneidad de principios y reglas —como él mismo lo anotó—, debido a la diversidad de intenciones y circunstancias que contribuyeron a formar nuestras leyes. En ella es donde más resalta la oposición entre los elementos derivados del Derecho Civil y los que dieron el ser a las costumbres castellanas, recopiladas en los Fueros y Ordenamientos.

Esas leyes partían de una concepción distinta, en muchos aspectos, de la que Bello tenía sobre la sucesión, como él lo expresó en algunas de las notas a los Proyectos del Código Civil. Tuvo que

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

569

hacer una obra de transacción entre lo existente y que era necesario reformar, trasegando al Código los principios del Derecho Romano y los de las leyes españolas, en todo cuanto le pareció necesario para realizar una obra de tendencia liberal, democrática, igualitaria y de acentuado carácter cristiano.

El estudio de las fuentes del Código Civil que se citan por Bello en los diversos proyectos, prueba que esos Fueros y Ordenamientos, de una parte, y el Derecho Romano, de otra, se tuvieron siempre a la vista, bien para aceptarlos, bien para reformarlos, bien para derogarlos, todo para alcanzar una obra que no fuera demasiado extraña al medio social y político del país. Pero los grandes principios que deben gobernar el Derecho Sucesoral no fueron por él olvidados, desde que decía lo siguiente: "El derecho de suceder trae su origen de la ley natural, que, haciendo de la industria y de la tranquilidad condiciones imprescindibles del orden social, mal podía permitir que la muerte convirtiese los frutos de aquélla en una presa del primer ocupante, y que la propiedad, envuelta en conflictos diarios, siempre insubsistente y precaria, apenas mereciese este nombre. Mas la ley civil debe darle su desarrollo y determinar la forma en que ha de existir, amoldándola a las instituciones y aplicándola a las circunstancias particulares de cada Estado" (10).

Trató —cosa que alcanzó sobradamente— de encauzar, mediante la organización jurídica del Derecho Hereditario, el progreso económico del país, poniendo atajo a sistemas que lo entrababan, como convenía a un país recién nacido a la vida política independiente. Así, justificando el sistema que había propuesto para la sucesión de personas que han perecido en un mismo acontecimiento, decía: "Esta regla nos parece, no sólo equitativa, sino de fácil inteligencia y aplicación a las sucesiones ab-intestato. Ella tiene además una ventaja política, que no debe desestimarse en un país republicano, y es el favorecer la subdivisión de los patrimonios, objeto de mucha importancia para las sociedades modernas, en que la industria y el comercio tienden con tanta fuerza a la acumulación de los capitales, origen fecundo de miserias y vicios"

(10) "El Araucano", año 1839.

(11). ¡Hermosas expresiones de Bello, que son elocuente mentís a quienes juzgan el Código como una obra eminentemente individualista y protectora de los poderosos!

Podría decirse que en esta materia le ocurrió al autor del Código algo semejante a lo que le aconteció a los redactores del Código de Napoleón, que se enfrentaron, por un lado a las regiones en que predominaba el Derecho Consuetudinario, impregnado de las tradiciones del Derecho Germánico, y por otro a las regiones del Derecho escrito, fundamentado en el Derecho Romano de Justiniano, formulado en las Novelas 118 y 127, de los años 544 y 548, respectivamente.

Una reseña esquemática de las fuentes que tuvo a la vista el autor del Código, en lo que al Derecho Sucesorio se refiere, deja de manifiesto que, en general, se sirvió de la legislación española vigente a la época en Chile, particularmente de las Leyes Alfonsoinas. Igualmente, el Derecho Romano fue un auxiliar eficaz, desde que, por otra parte, las Leyes de Partidas eran romanizantes por excelencia. Por lo demás, Bello tenía en alta estima al Derecho Romano, legislación que ha hecho decir a L'Herminier —citado por el autor del Código—: "Algunos de sus principios pueden controvertirse; pero su método, su lógica, su sistema científico, le ha dado y conserva una superioridad decidida sobre todas las otras legislaciones. Sus textos son la obra maestra del estilo jurídico; jamás podrá escribirse el Derecho, como bajo la pluma de Ulpiano y de Papiniano".

Yo creo, sobre este particular —y se me permitirá el comentario—, que es hora de que nuestro Seminario de Derecho Privado comience la tarea de estudiar el Derecho Romano en la obra de Andrés Bello, tal como ciertos comentaristas lo han realizado respecto de la obra de Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil Argentino.

Retrocediendo al punto de partida de las fuentes del Derecho Sucesoral, debo anotar que, además, le sirvieron enormemente el Código de Francia y las obras de algunos expositores, pues, como él lo expresaba: "Sus disputas, sus paradojas, sus aberraciones mismas, nos señalan como con el dedo las frases que el legislador debe

(11) "El Araucano", año 1839.

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

571

aclarar, las cuestiones que importa dirimir, los puntos en que se echa de menos una regla para la dirección de los particulares en sus negocios, y de la judicatura en sus fallos". "¿De cuánto no sirvieron —agregaba— a los legisladores franceses para la redacción de su precioso Código Civil, los trabajos de Dumoulin, Domat, y sobre todo Pothier?" (12).

Y en este orden de ideas anoto que cita a Delvincourt, autor al cual hace referencia con suma frecuencia; a Rogron, en sus comentarios al Código de Francia; a Merlin, en su Répertoire, etc. Savigny ocupa un lugar destacado, y de este tratadista tomó principalmente el principio de la unidad de la ley que regla la sucesión hereditaria, esto es, la que consagra el artículo 955.

* * *

Creo oportuno entrar al corazón del asunto que me preocupa, señalando a grandes rasgos la orientación general del Derecho Sucesorio en el Código Civil.

8.—**Unidad del patrimonio.**—Bello consagró el principio de la unidad del patrimonio como rector del Derecho Sucesorio en la sucesión legítima; unidad que se traduce en que las leyes que reglan la sucesión intestada son las mismas para todos los bienes del de cuius: activo y pasivo; muebles e inmuebles; heredados o adquiridos a cualquier título por el causante.

No existe en el Código la pluralidad de las masas hereditarias, según se consideren los diversos bienes que formaban el patrimonio del finado —muebles e inmuebles—, o el origen de cómo llegaron ciertos y determinados bienes al patrimonio que fue del causante.

Tomando en consideración este último aspecto, se aplicaba el principio "paterna paternis, materna maternis", según el cual los inmuebles "propios", o sea, los heredados a su vez por el difunto, se trasmitían, en ciertos órdenes sucesorios, a los parientes de la línea que había dado origen a esos bienes, excluyendo a los más cercanos, si lo eran de la otra línea.

(12) "El Araucano", año 1839.

Se establece por el Código que la ley no atiende al origen de los bienes para reglar la sucesión intestada (artículo 981). Explicando este principio decía Bello: "Así, por ejemplo, el hermano uterino y el consanguíneo suceden por partes iguales, sin embargo de que la mayor parte de los bienes del hermano difunto hayan provenido de la línea paterna".

No era éste el sistema consagrado por el antiguo Derecho. Si bien es cierto que el principio venía establecido por las leyes españolas vigentes a la fecha de la promulgación del Código, la verdad es que esas mismas leyes hacían excepción respecto de la sucesión en el orden de los hermanos, pues en tal caso se disponía que el hermano paterno heredara todos los bienes del de cuius que le viniesen de su padre, y el hermano materno los que le viniesen de la madre.

El establecimiento general del principio de la unidad del patrimonio tiene por fundamento, en mi concepto, el de que Bello estimaba, por una parte, que "los derechos para suceder abintestato se fundan en presunciones de la voluntad del difunto": presunciones que se extraen del orden natural de las afecciones del causante, según la proximidad de la sangre y no tomándose en cuenta el origen de los bienes, que nada tiene que ver con los presuntos afectos del autor de la sucesión. Por otra parte, la reglamentación unitaria del patrimonio permitía y permite establecer una sociedad democrática, en lo político, e individualista, en lo económico.

En efecto, el sistema del Código terminó con el privilegio atentatorio de los principios democráticos, de conservar los bienes dentro de una misma familia, que la regla derogada hacía posible. De otro lado, la unidad del patrimonio es la consagración del derecho absoluto del individuo sobre los bienes, que el principio "paterna paternis, materna maternis" no reconocía, pues con él se materializaba el derecho de la familia sobre los bienes dejados por el difunto, como que los más importantes, los inmuebles, pertenecían en cierta medida al grupo familiar, antes que a las afecciones presuntas del difunto.

"Se entendió favorecer los principios democráticos —dice un autor—, cuando se hizo de los bienes una unidad que formaba el patrimonio, como una proyección de la personalidad; con ello des-

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

573

aparecieron las antiguas divisiones de los bienes en nobles y plebeyos, propios, o de familia y adquiridos, con lo que se rompía en parte el principio aristocrático de la conservación de los bienes dentro de una misma familia" (13).

Acentuando el principio a que vengo haciendo referencia, y favoreciendo así el derecho individual del propietario antes que el del grupo familiar, estableció el autor del Código la norma según la cual la ley no atiende al origen de los bienes para gravarlos con restituciones o reservas.

Se derogó con esta disposición —como Bello lo expresó en nota al artículo 1142 del Proyecto del año 1853— la Ley 15 de Toro. Se establecía por esa ley la obligación de la mujer o del varón, que pasaba a nuevo matrimonio, de reservar para los hijos del precedente la propiedad de lo que hubieren recibido por herencia de su primer marido o mujer, según el caso, o que heredaren de los hijos del anterior enlace. Había, por tanto, bienes reservables o reservaticios.

Con el desaparecimiento de esos bienes el derecho de dominio no sufrió ya ningún menoscabo, en este orden de ideas. El grupo familiar no tuvo derechos que hacer valer, que no fueran los que la ley común estableció. Es interesante hacer notar que algunas legislaciones todavía mantienen estos bienes, como ocurre en España, cuyo Código Civil los reglamenta en los artículos 968 y siguientes.

Como expresaba Demogue, refiriéndose a este problema en Francia, "la idea de la conservación de los bienes en la familia que tuvo tanta influencia en el antiguo Derecho, ha sido abandonada por el Código Civil, a lo menos en su fundamento, y se puede decir que lo que caracteriza la devolución de la sucesión abintestato, es que se tienen en cuenta desde luego, los afectos probables del difunto. Pero las consecuencias del principio se han desenvuelto; de ahí se desprenden las más importantes modificaciones introducidas desde hace cien años al Código Civil en las sucesiones abintestatos: el aumento de los derechos del cónyuge sobreviviente, de los hijos naturales y la limitación de los grados sucesorios".

(13) Martínez Paz: Obra citada, página 4.

Pero el principio de la unidad del patrimonio recibe la confirmación en la ley por la cual se rige la sucesión: la del último domicilio del causante (artículo 955 inciso 2.º). Se siguió por el legislador la doctrina de Savigny, como se deja constancia en nota al artículo 1113 del Proyecto Inédito. Se abandonó el principio del Código Francés y otros, que aplican la ley patria para los inmuebles situados dentro de su territorio, y para los muebles la ley personal del de cuius.

El Derecho Sucesoral queda entregado por el Código a la ley local del domicilio en que se abre la sucesión, sin atender a otra consideración, siguiendo con ello el principio de la unidad de la sucesión mortis causa. Por consiguiente, no se atiende a la nacionalidad del causante: extranjero que fallece domiciliado en Chile, su sucesión se regla por la ley chilena; al contrario, chileno fallecido teniendo su último domicilio en el extranjero, es la ley de ese país la que regla el derecho sucesorio. Lo único que importa tener en cuenta es el último domicilio del autor de la sucesión. De esta suerte, el patrimonio es una unidad, sometida siempre a la misma ley sucesoral.

Dada la unidad del patrimonio, de un contenido indeterminado, como un objeto ideal, que puede componerse de muebles e inmuebles, de cosas corporales o incorporeales, no está situado en ninguna parte fija. Por tanto, no puede existir otro factor más importante para determinar la ley aplicable a la sucesión que la del último domicilio del de cuius. Cualquier otro elemento que se tuviera en consideración no daría una regla con la precisión y la seguridad que la adoptada por el Código.

Así, si se tuviera en cuenta el domicilio de los herederos, habría tantas jurisdicciones como domicilios de cada uno de ellos; si se tuviera en consideración la naturaleza de los bienes, resultaría que estando éstos diseminados en varios lugares las dificultades serían muy grandes. En todo caso, la unidad de la ley que debe gobernar todo el haz hereditario se impone, que es lo que se hace por nuestro Derecho. "El sistema tradicional —dicen Planiol y Ripert—, dividiendo la herencia en varios cuerpos de bienes independientes sometidos a legislaciones diferentes, crea complicaciones, dificultades y a veces imposibilidades. La sucesión es la tras-

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

575

misión, no de bienes aislados, sino de bienes que forman parte de un mismo todo, de un patrimonio. De ahí que su reglamentación deba ser una como el objeto mismo al cual se aplica" (14).

Pero desde que se reconoce a todas las naciones el derecho de "reglar las sucesiones que se abran en su territorio", es natural y obvio que cada país puede organizarlas como mejor le convenga, y ello explica la diversidad de legislaciones sobre esta materia, particularmente si se recuerda con Aubry y Rau, que "lo que domina en materia de sucesiones son las vistas políticas, las razones de interés social.

Del principio de la unidad de la ley sucesoral que adopta el Código, se desprenden, entre otras, las siguientes consecuencias.

1.º) Que el orden de suceder, o sea, las personas que son llamadas a recoger el patrimonio del de cuius a falta de testamento, es determinado por la ley del último domicilio.

Las sucesiones abiertas en Chile se gobiernan por la ley chilena, aunque la ley personal del difunto, en caso de ser extranjero, disponga otra forma de llamamiento. Por tanto, el artículo 983 tendrá plena eficacia en este orden de ideas;

2.º) La capacidad e indignidad de los asignatarios quedan comprendidas por la ley del último domicilio.

Resulta que poco o nada importa que un heredero estuviere afectado, por su ley personal, de una incapacidad o indignidad no reconocida por la ley chilena, pues en tal caso podrá suceder sin atenderse a otras incapacidades o indignidades que las establecidas por el Código Civil.

Así, podrá heredar en Chile toda persona que haya sobrevivido al difunto un momento siquiera, después de nacida, aunque según los artículos 30, 745, 959 y siguientes del Código Civil Español no pudiera, por reputar nacido esa legislación sólo "al feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno". Igualmente, podrá suceder en Chile el confesor de cualquier credo que no sea el católico, aunque se encuentre en la situación prevista por el artículo 965, el que no

(14) "Derecho Civil Francés", Tomo IV, N.º 1, página 22.

podría heredar según el Código Argentino, desde que por el artículo 3740 de ese cuerpo de leyes "tiene la misma incapacidad el ministro protestante que asista al testador en su última enfermedad";

3.º) Los derechos y las obligaciones de los sucesores quedan en todo sujetos a la ley local.

La porción que cada cual debe llevar, en qué condiciones y las obligaciones que son de su cargo, se sujetan a la ley chilena respecto de las sucesiones abiertas en Chile. Si la sucesión de un peruano se abre en el territorio chileno, por haber tenido en él su último domicilio, la responsabilidad del heredero en las deudas hereditarias y testamentarias se gobernará por los artículos 1097 y 1354 y no por el artículo 658 del Código Civil del Perú, en cuanto por él se dispone que "el heredero sólo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de ésta", como quiera que en Chile, si no se goza del beneficio de inventario, la responsabilidad del heredero es ilimitada.

9.—¿Cómo se encuentra hoy en día el principio de la unidad del patrimonio?—Si se tiene en vista solamente el Código Civil, la situación permanece igual. Ningún cambio podría ser anotado.

Pero, como el mismo Bello lo decía: "El Derecho de una nación, semejante a su lengua, no está nunca fijo; y su existencia es una serie continua de alteraciones y mudanzas". Es lo que ha ocurrido en esta materia, aunque las reformas son más de cantidad que de sustancia.

Leyes dictadas con posterioridad al Código, especialmente en los últimos treinta años, han introducido al principio de la unidad ciertas talas y reajustes. No hay necesidad de recordar que las distintas clases sociales desarrollan condiciones de vida diferentes. Las clases medias y asalariadas han hecho necesaria la dictación de leyes especiales que han venido a afectar al principio de la unidad patrimonial, sin que se encuentre una justificación suficientemente racional.

Se da el caso, entonces, de que una parte del haz hereditario se encuentra sometida a una legislación particular, a una forma de reparto, y el resto al derecho común.

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

577

Para demostrar la afirmación arriba apuntada sobran los ejemplos. Así, el Decreto con Fuerza de Ley N.º 309, de 3 de Agosto de 1953, que reglamenta la organización de la Caja de Retiros y de Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, estatuye que en caso de fallecimiento de un imponente, su fondo de retiro —parte del haz hereditario— se entregará íntegro a sus legitimarios y al cónyuge supérstite, en conformidad a las leyes que reglan la sucesión intestada. Si el imponente fallecido no dejare cónyuge ni legitimarios, a sus demás herederos testamentarios o abintestatos, con exclusión del Fisco. A falta de los herederos señalados anteriormente, su fondo de retiro íntegro acrecerá al fondo de Previsión Social.

La primera consecuencia que extraigo del mecanismo de esta ley es la siguiente: La ley común, consagrada por el artículo 995 del Código Civil, ha sido abolida, en la parte del patrimonio del causante que se ha señalado, en cuanto no llama al Fisco a falta de otro sucesor. Los fondos de retiro jamás pasarán al Fisco, aunque el resto del patrimonio se reglará por el derecho común.

Pero obtengo otra conclusión de esa nueva legislación, y es ésta: Las personas jurídicas, salvo el Fisco, no son jamás herederas abintestato por el derecho común; pero resultan sucesoras por la citada legislación, como quiera que a falta de los herederos señalados por el Código, con exclusión del Fisco, el fondo de retiro acrecerá a los fondos de previsión social, o sea, en último término a la misma Caja, que es una persona jurídica. Esto quiere decir que otra vez el principio viene a ser disminuido.

La Ley N.º 8.895, de 4 de Octubre de 1947, concede una indemnización de desahucio al personal afecto al régimen de previsión de la Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas de la Defensa Nacional. Por el artículo 1.º inciso 2.º se dispone que "el desahucio del personal que fallezca en servicio corresponderá a los beneficiarios de la pensión de montepío del causante".

Y el desahucio, según el reglamento dictado para la aplicación de esta ley, Decreto N.º 951, de 29 de Diciembre de 1947, es "una indemnización en dinero efectivo, independiente de la pensión de retiro y montepío militar que paga de una sola vez a sus imponentes la Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas de la Defensa

Nacional"; pago que se hace, en caso de fallecimiento del imponente, en primer lugar a la viuda. En caso de existir viuda legítima e hijos legítimos de anteriores nupcias, varones menores de 21 años o inválidos absolutos y mujeres solteras o viudas, el desahucio se distribuirá en la siguiente forma: a la viuda corresponderá la mitad, y el resto se distribuirá entre los hijos por iguales partes. Si el hijo fuere uno solo, éste tendrá derecho únicamente a un tercio del desahucio, correspondiendo los otros dos tercios a la viuda. En segundo lugar, y a falta de viuda, los hijos legítimos varones menores de veintiún años y mujeres solteras o viudas, se distribuirán el desahucio por iguales partes entre todos ellos. En tercer lugar, y a falta de viuda e hijos, corresponde al padre inválido absoluto o mayor de sesenta y cinco años, condiciones que deben reunirse en el momento de devengarse el desahucio, esto es, en el momento de fallecer el causante. En cuarto lugar, y a falta de los beneficiarios anteriores, lo percibe la madre viuda. En quinto lugar, y en defecto de los anteriores, las hermanas cuyo padre haya fallecido.

Yo no puedo entrar al detalle de estas disposiciones legales, pero a su simple lectura desprendo la gran conclusión de que el principio de la unidad ha sido roto, desde que a cierta parte del patrimonio dejado por una persona a su fallecimiento se le aplican reglas particulares para el llamamiento de los beneficiarios y para el reparto entre ellos de esa parte del haz hereditario.

Las leyes orgánicas de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y de la Caja de Previsión de Empleados Particulares contienen también reglas propias sobre estas mismas materias, que no hay para qué traer a colación a fin de demostrar la cantidad de modificaciones que el principio de que estoy tratando ha sufrido.

10.—**El principio de la igualdad.**—Otra de las grandes orientaciones del Derecho Sucesorio en el Código es el principio de la igualdad, estatuido por el artículo 982, en cuanto dispone que "en la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura".

Se consagra así el principio de la igualdad para suceder. Los antiguos privilegios de la masculinidad y de prioridad del naci-

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

579

miento han desaparecido. El principio democrático de la unidad que forma el patrimonio, se ha venido a completar con la noción de la división igual de la herencia entre los parientes de un mismo grado.

No se podría señalar otro caso de excepción al principio de la igualdad de los que suceden por derecho personal, entre los parientes de un mismo grado, que aquél en que los hermanos del difunto son llamados a cierta porción de sus bienes, pues en tal caso cada uno de los hermanos por parte de padre o de madre no lleva más que la mitad de la cuota de los hermanos carnales del de cuius (artículos 985 inciso 2.º y 990 inciso 5.º).

Esta noción de la división igual de la herencia entre los parientes del mismo grado, ha venido a completar el principio democrático de la igualdad en el orden patrimonial, en lo que a la herencia se refiere. No es muy difícil encontrar el fundamento de esta noción en el Derecho Sucesoral, si se recuerda solamente, la inspiración netamente liberal del Código Civil, noción de la igualdad que, a fines del siglo XVIII y durante los posteriores años, es notoria. Con razón han podido decir Colin y Capitant lo siguiente: "De una manera general, a fines del siglo XVIII, el pensamiento de la igualdad entre los herederos se eleva casi a la altura de un dogma incontestado".

11.—El centro de la sucesión intestada es la familia legítima.— Confirmando el principio de la protección a la familia legítima, que se había establecido en otros pasajes del Código, Bello hizo de ella el centro de referencia para el gobierno de la sucesión intestada.

No admitió que los hijos naturales, en concurrencia con los hijos legítimos, pudieran llevar parte alguna del haz hereditario. Su idea en esta materia era definitiva, de manera que para expresarla la redundancia le pareció justa. Así, en el Proyecto de los años 1841-45 se encuentra, en primer lugar, el artículo 11 del Título 2.º, en que se decía: "Los hijos legítimos excluyen a todos los otros herederos".

Habría sido suficiente esa regla para comprender que los hijos naturales no podían concurrir con los legítimos; pero Bello deseaba dejar esto bien en claro. Fue así como por el artículo 18

de ese mismo Título se agregó: "Los hijos naturales no concurren con los legítimos en la sucesión ab-intestato del padre ni de la madre". Y esta misma forma de expresarse se encuentra en los Proyectos de los años 1846 (artículos 34 y 41) y 1853 (artículos 1149 y 1115).

Su repugnancia por todo lo que no fuera la familia legítima, conforme al concepto cristiano de la misma, desde que todo lo referente al matrimonio lo había entregado a la Iglesia Católica, le había inspirado en los primeros proyectos la exclusión del padre natural de la herencia del hijo natural, permitiendo sólo por razones de humanidad, que la madre de esa condición heredara a su hijo. Fundando su parecer decía Bello: "La paternidad ilegítima supone una seducción, un acto pernicioso a la sociedad, y especialmente reprobado por la moral cristiana, en una palabra, supone un delito. En este delito, el padre ha sido el instigador, el autor; la madre, una víctima, de cuya miseria participa más o menos el hijo" (15).

En la célebre controversia entre don Miguel María Güemes y don Andrés Bello, en que el primero era partidario de que el padre natural heredara al hijo de esta calidad, el último decía: "El hijo natural reconocido funda su derecho en un acto auténtico de la persona a quien se presenta a suceder; y el padre que, sobreviviéndole, se presentase a la sucesión del hijo, habría de derivar su derecho, no de un acto del hijo, sino de un acto propio. El reconocimiento del padre es un llamamiento tácito a su herencia intestada. ¿Lo haremos también un acto en que el padre se arrogue de su propia autoridad el derecho de suceder al hijo? ¿No se establecería de este modo una voluntad captatoria? ¿Te doy el derecho de suceder en mis bienes, para adquirir el derecho de suceder en los tuyos? (16). No obstante, en el hecho tuvo que transigir y aceptar la reciprocidad de derechos hereditarios entre el padre natural y el hijo de esa misma condición.

Pero hay más: se sabe que la Ley 15 de Toro confería en la herencia de la madre ciertos derechos a los hijos que denominaba "bastardos o ilegítimos", cuando no tenían "hijo o hijos". Ahora

(15) "Opúsculos Jurídicos", página 407.

(16) "Opúsculos Jurídicos", página 408.

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

581

bien, el pensamiento de Bello está ya expuesto anteriormente para los naturales, de manera que no es de extrañar que le haya negado aun esos derechos de la legislación española a los ilegítimos, pues sostenía, al referirse a la citada Ley 15 de Toro, lo siguiente:

"Examinemos los efectos de esta ley. En la sucesión intestada ¡qué de consecuencias horribles! El honor de la madre, el de una familia entera, la moral y la decencia pública necesariamente comprometidos por la prole ilegítima, que no puede poner en claro sus derechos sin sacar a la luz las vergonzosas flaquezas de una conexión clandestina. Luego, ¡qué campo al fraude para formar filiaciones, añadiendo a la calumnia el perjurio!".

"¿Y qué duro no es en la sucesión testamentaria poner a la madre en el conflicto de revelar su flaqueza o de contravenir a la ley? Por otra parte, la codicia, que es capaz de fraguar una infame impostura para torcer la sucesión intestada, ¿no se valdrá de los mismos medios para atacar el testamento?" (17).

Pero es en la institución de las asignaciones forzosas donde se deja mayormente de manifiesto la protección de la familia legítima, que se fortifica y consolida en el orden económico.

De estas asignaciones, la porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras de los descendientes legítimos (artículo 1167), son todas en provecho de la familia legítima, en primer lugar. Sólo la asignación de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, permitía que una parte del patrimonio del difunto fuera a favorecer a quienes no tenían vínculo de parentesco legítimo con el de cuius.

El derecho hereditario de los legitimarios y de los asignatarios de la cuarta de mejoras fue tan celosamente cautelado que "la legítima rigurosa no es susceptible de condición, plazo, modo o gravamen alguno" (artículo 1192), y "los gravámenes impuestos a los partícipes de la cuarta de mejoras serán siempre en favor de uno o más de los otros descendientes legítimos" (artículo 1195, inciso 2.º). El temor de que se restringieran por el testador los derechos de los legitimarios y de la cuarta de mejoras, con gravámenes fáciles de establecer, inspiraron estas reglas. Además, Bello

(17) Nota al artículo 1343 del Proyecto del año 1853.

ordenó las acumulaciones para formar lo que se denomina "primer acervo imaginario" o la institución de la colación, a objeto de mantener entre los legitimarios la debida igualdad, ya que de lo contrario —y como él lo decía—, se harían "ilusorias las legítimas" (18).

Se sabe que el autor del Código no era partidario del sistema de las legítimas ni de la cuarta de mejoras. Ha resultado ya de estilo en la doctrina y en la cátedra universitaria, cada vez que de esta cuestión se trata, recordar que Bello deseaba la libertad de testar en toda su integridad.

Respecto de la cuarta de mejoras, en las notas al Proyecto de 1841-45 decía: "En este Proyecto no se impone al padre la obligación de emplear cierta cuota de sus bienes, fuera de las legítimas, en beneficiar a uno o más de sus descendientes a su arbitrio, dividiéndola entre ellos como quiera. Se le autoriza, pues, para disponer libremente de la mitad de sus bienes, y se suprime la mejora del tercio, invención peculiar de los godos. Esta supresión es una de las reformas en que tenemos más divergencia de opiniones. La creemos, con todo, apoyada en razones de gran peso".

Y respecto de las legítimas, manifestó, en nota al Proyecto de 1853, lo siguiente: "En el establecimiento de legítimas, la filosofía no parece estar de acuerdo con la legislación. Aquel antiguo principio de los romanos: "Pater familias uti legassit... ita jus esto", sería la regla que propondríamos, si no fuese preciso transigir con las preocupaciones". Abundó en reflexiones para apoyar la libertad de testar; pero agregó: "A pesar de estas consideraciones, que creemos justificadas por la experiencia, ha conservado este Proyecto las legítimas, aunque acercándose más al nivel de las Partidas y de la legislación romana, que al del Fuero Juzgo, el Fuero Real y las Leyes de Toro".

Mejóro los derechos del cónyuge supérstite, partiendo de la base de que "los esposos viven en una comunidad de bienes y de intereses. La fortuna del uno sirve a los goces, a las necesidades del otro; y a todo desfalco, por pequeño que sea, en la hacienda de los dos, corresponde necesariamente un desfalco de felicidad y bienestar en cada uno. La ley que manda dar una parte del caudal

(18) Nota al artículo 9 del Proyecto de los años 1841-1845, Título VIII.

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

583

del cónyuge difunto a otra persona, disminuye por fuerza la felicidad y el bienestar del cónyuge sobreviviente" (19). Y como en el primer Proyecto el cónyuge no concurría en la sucesión intestada, según el artículo 23 del Título II, ni con los hijos, ni con los ascendientes, ni con los hermanos legítimos del difunto, y sólo con los demás colaterales legítimos, limitó el derecho de los últimos al sexto grado, como que en la legislación anterior heredaban hasta el décimo grado, haciendo presente que "la limitación era en favor del cónyuge sobreviviente y del fisco" (20).

Esta protección al cónyuge sobreviviente quedó consagrada por el Código, en definitiva, introduciéndose, por una parte, el instituto de la porción conyugal, en sustitución de la **cuarta marital**, "porque ésta parece indicar —según lo expresó— la cuarta parte de los bienes del marido, para la viuda, no la cuarta parte de los bienes de la mujer, para el viudo. La ley de Partida, si hemos de atenernos a su sentido natural, sólo concede esta asignación a la mujer. La Comisión ha seguido la opinión de los que creen que deben ser recíprocos los derechos de los dos consortes" (21).

Por otro lado, dispuso que los derechos de los hijos legítimos al haz hereditario, en la sucesión intestada, lo fueran "sin perjuicio de la porción conyugal que corresponda al marido o mujer sobreviviente" (artículo 988 antiguo), y reservó una porción considerable del patrimonio del de cuius al cónyuge supérstite en concurrencia con los ascendientes legítimos, los hijos naturales y los hermanos legítimos, para terminar dándole toda la herencia antes que a los demás colaterales. Y en el orden irregular de la sucesión intestada también se establecieron derechos hereditarios importantes para el cónyuge sobreviviente, si bien omitió hacerlo concurrir con los hijos naturales del finado.

Se incurre, pues, en un error por Cosentini, cuando afirma, en su obra "La Reforma de la Legislación Civil y el Proletariado", que "la legislación italiana —la del año 1865— ha sido también la primera en garantizar al consorte sobreviviente, en concurso con no importa qué heredero, una reserva correspondiente, en todo

(19) "Opúsculos Jurídicos", página 399.

(20) Nota al artículo 16 del Proyecto de los años 1841-1845, Título II.

(21) Nota al Proyecto de los años 1841-1845.

estado económico, a un cuarto o a una parte viril en usufructo, según los casos, en concurso con los hijos legítimos o sus descendientes..."; porque esa ya derogada legislación, a la cual se alude, es 10 años posterior al Código de Bello, que garantizó al cónyuge sobreviviente iguales o mejores derechos que los que aquella contemplaba.

La protección al cónyuge supérstite es señalada por los autores como una de las manifestaciones más elocuentes de que, en el Derecho Sucesoral, y cuando de la herencia intestada se trata, el legislador atiende solamente para reglarla a los afectos probables del difunto. Y en esta materia —como lo decía Güemes en esa controversia antes citada—, "si la ley, al reglar la sucesión intestada, debe tener por base el afecto del difunto, llamando a la sucesión de él a aquellas personas a quienes es presumible hubiese amado más, pocos podrán pretender un derecho más fuerte a dicha sucesión que el cónyuge sobreviviente". Pero es natural que ese mismo fundamento de los derechos sucesorales del cónyuge hizo llegar a Bello, con toda lógica, a la conclusión de que el causante no habría querido favorecer al cónyuge sobreviviente que por su culpa dio ocasión al divorcio, por lo cual, y conforme a los artículos 994 y 1173, queda privado de sus derechos a la sucesión intestada y a la porción conyugal.

★ ★ ★

El estado del Derecho Sucesorio, en lo que se refiere a la protección de la familia legítima, se encuentra hoy en día notablemente reformado.

En virtud del Derecho Sucesoral, los hijos naturales se han introducido en el círculo de la familia legítima. Ahora concurren en la sucesión intestada con los hijos legítimos, aunque con una porción inferior (artículo 988); les corresponde, también, conjuntamente con los descendientes legítimos, una parte de la asignación forzosa de la legítima (artículos 988, 1182 N.º 3.º y 1183), de manera que el testador debe tenerlos en cuenta al otorgar el acto de última voluntad, si no quiere que el negocio mortis causa sea reformado; y pueden llevar la asignación forzosa de la cuarta de mejoras (artículos 1167 N.º 4.º y 1195), sin perjuicio de aprove-

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

585

charla en parte en virtud del acrecimiento que contempla el artículo 1191, esto es, cuando el testador no ha dispuesto de ella y acrece a la mitad legitimaria.

Debo recordar, en este mismo orden de ideas, que los derechos hereditarios del hijo natural en el patrimonio de su padre o madre existen siempre; pero que el derecho de estos últimos no siempre procede en la herencia de los hijos naturales, pues si se trata del reconocimiento contemplado por los números 2.º, 3.º y 4.º del artículo 271, queda eliminado el padre o la madre de participar en el haz hereditario de su hijo natural. La excepción se justifica por sí sola.

Es tan reciente la reforma en esta materia, que en la hora actual no es posible juzgar acertadamente sus efectos convenientes o perjudiciales. Pero si sólo se tuviera presente, con el autor del Código, "que los derechos para suceder ab-intestato se fundan en presunciones de la voluntad del difunto", la reforma se justificaría, ya que los afectos han de ir por igual a todos los descendientes.

Sin embargo, ya está dicho que en la mente de Bello no estuvo jamás conferirle derechos hereditarios a los hijos naturales conjuntamente con los legítimos. Lo que ha ocurrido es que se ha debilitado el vínculo moral de la familia, de manera que la noción de la asistencia al necesitado ha venido a sustituir al anterior concepto de que la familia era una entidad moral, que convenía defender y consolidar por sobre toda otra consideración. Está ya casi perdida en el tiempo la regla del antiguo Derecho Francés, en el sentido de que los "bastardos no heredan" y que significaba —como lo anota Bonnecase—, "que no teniendo los hijos naturales familia alguna, no podían heredar a nadie".

Hay que reconocer, cualquiera que sea el pensamiento que se tenga sobre el particular, que el sistema actual del Código venía preparado por una orientación general de la legislación comparada en este sentido. Yo no dispongo del tiempo adecuado para entrar al detalle. Me limitaré a citar, entre otros, los Códigos de Francia, Brasil, Perú, Italia, Argentina, que establecían ya para los hijos naturales, derechos muy semejantes a los que ha introducido en nuestra legislación la Ley N.º 10.271 de 1952.

Los derechos del cónyuge sobreviviente se han mejorado también notablemente por las reformas de la ley antes indicada.

Se ha aumentado la porción conyugal cuando concurre con dos o más hijos legítimos y, en general, en todo el sistema de distribución de la herencia intestada se deja sentir en forma muy marcada este tratamiento preferente que los legisladores de la Ley N.º 10.271 le han dado al cónyuge supérstite. Así, por vía puramente ejemplar, mientras el Código, en concurrencia con los ascendientes legítimos y los hijos naturales, le confería $1/5$ del haz hereditario, ahora se le acuerda, concurriendo con los mismos herederos, $1/3$ de la herencia. Además, se ha permitido que el finado le deje la parte de libre disposición, sin perjuicio de llevar porción conyugal, cuestión ésta que preocupó a los doctrinadores del Código Civil y que inspiró una jurisprudencia no siempre uniforme. Igualmente, por imperio del artículo 1199, para el cómputo de la porción conyugal el cónyuge supérstite tiene derecho a la formación del primer acervo imaginario o colación, cuando concurre con los descendientes legítimos del de cuius. Y digo esto, porque bien saben los técnicos a cuántas discusiones dio lugar este asunto, antes de la dictación de la Ley N.º 10.271.

Pero, en el deseo de beneficiar al cónyuge sobreviviente se llegó, por los legisladores del año 1952, a crear en el Código un asignatario anómalo, al que, para ciertos efectos legales, se le considera como heredero y para otros como legatario, hasta el extremo de que si se pretende que es lo primero, los inconvenientes legales son muy grandes, y si se estima que es legatario, no por eso los inconvenientes desaparecen. Me refiero a la disposición del artículo 1180, según la cual: "El cónyuge, en cuanto asignatario de porción conyugal, será considerado como heredero. Sin embargo, en lo que percibiére a ese título, sólo tendrá la responsabilidad subsidiaria de los legatarios".

Ahora ya no tienen ningún sentido en la realidad, y nos parecerá extraño que en su tiempo lo hayan tenido, aquellas expresiones del tribuno Simeón, que, inspiradas en el deseo de conservar los bienes dentro de los parientes del causante, al informar la ley de sucesiones que iría a incorporarse al Código de Napoleón, dijo: "El cónyuge sobreviviente, por estrecho que hubiera llegado a ser

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

587

su vínculo de unión con el causante, pertenecía a una familia extraña. Si la nueva que ambos se proponían constituir viene a faltar, la ley, sin perjuicio de las muestras de amistad que ambos esposos se hayan dado, no los llama a heredarse sino a falta de otros parientes". Es, como puede verse, un mundo de diferencia con el sistema del Código y que la Ley N.º 10.271 se encargó de acentuar.

12.—El heredero es el continuador de la persona del difunto.— Es también una característica fundamental del Derecho Sucesoral chileno, aquella según la cual el heredero es el continuador de la persona del difunto.

Como lo expresa el artículo 1097, el heredero representa la persona del causante. Esta expresión, dicho de paso, no es muy exacta si con ella se quisiera significar la idea de que el heredero actúa a nombre y en lugar de otra persona, que es el concepto que comporta la representación, y que en esta materia sería un despropósito. Lo que pasa es que el artículo 1097 ha querido expresar, de la manera más enfática posible, que en Chile el heredero lo es más en la personalidad jurídica del de cuius que en sus bienes, lo que explica la responsabilidad personal e ilimitada por las obligaciones hereditarias y testamentarias del finado, que pesa sobre el heredero. Salvo el caso que acepte con beneficio de inventario (artículo 1247), es obligado al pago de todas las deudas del difunto —hereditarias y testamentarias— (artículos 1097 y 1354), no solamente "cum viribus —con los bienes heredados— o "pro viribus" —hasta el valor de los bienes hereditarios—, sino "ultra vires hereditatis" —más allá de las fuerzas de la herencia—.

El heredero es, pues, la misma persona del difunto y lo representa en todos sus derechos activos y pasivos de naturaleza patrimonial, es decir, susceptibles de apreciación pecuniaria.

El Código se encarga de desenvolver el principio de muchas maneras, pero no tengo la posibilidad de referirme a todas ellas. Cito solamente algunas: Todo contrato celebrado por el causante afecta al heredero, por aplicación del aforismo de que "quien contrata lo hace para sí y para sus sucesores", que la jurisprudencia ha desarrollado en múltiples aspectos; los herederos pueden alegar la nulidad relativa y, con ciertas reservas impuestas por la jurisprudencia, la absoluta, salvo que de parte del incapaz haya habido

dolo para inducir al acto o contrato (artículos 1684 y 1685); la acción y la excepción de cosa juzgada aprovecha o perjudica al heredero, etc.

Conviene recordar que, a pesar de la representación en la persona del difunto que la ley le atribuye al heredero, por el Código no se ha mantenido el principio de que la posesión del de cuius continúa en el heredero. Esto es así, por cuanto el artículo 717 manda que la posesión del sucesor principia en él, con lo que Bello se apartó de los precedentes del Derecho Romano, en que la calidad con que el difunto poseía una cosa se traspasaba al heredero, de manera que la buena o mala fe de aquél se mantenía en el sucesor a título universal, "porque —como lo enseñaba Pothier— los herederos, siendo la continuación de la persona del difunto, siendo sucesores in universum jus defuncti, la posesión a la cual han sucedido al difunto, es la misma posesión que éste tendría, la que continúa con las mismas cualidades y los mismos vicios que tenía en su principio" (22).

Pero recojo el principio esencial, esto es, que la responsabilidad ultra vires es lo que le da carácter a la sucesión del heredero en la personalidad jurídica del difunto. Es en esa responsabilidad donde se finca mayormente el carácter atribuido por el Código al heredero, pues todas las otras derivaciones pueden ser discutidas o controvertidas; pero ésta queda fuera de toda polémica.

¿Cuál es el origen y fundamento de la idea de ver en el heredero la continuación de la personalidad jurídica del difunto?

Hay muchas explicaciones. Yo no puedo detenerme en todas ellas; pero creo que después de los estudios del Derecho Romano realizados por romanistas tan eminentes como los italianos Scialoja y Bonfante, la explicación más acertada es la siguiente, reducida a sus más elementales expresiones:

La herencia, en las XII Tablas se enlaza directamente con la soberanía familiar. Bajo el nuevo jefe, heres, heredero, señor, debía permanecer unido y sujeto el grupo familiar. El traspaso del patrimonio del difunto —concepto éste que en aquel entonces no se había desarrollado como lo conocemos hoy— nada tenía que ver con la esencia de la institución del heredero, de manera que se

(22) "Tratado de la Posesión", N.º 33, página 23.

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

589

entiende por tal, no la persona a la que se le deja todo el patrimonio o una cuota-parte del mismo, sino a quien se le da el título de heredero. El heredero era quien sucedía, por recibir la soberanía familiar, en las deudas, esto es, en el culto (sacra), los sepulcros, el derecho de patronato con los derechos de éste derivados y los derechos de hospitalidad y de amistad; elementos que, excepto las deudas, tuvieron más adelante un desarrollo particular. Las deudas no formaban, entonces, parte del patrimonio; pero representaban las responsabilidades propias de toda sucesión soberana. La sucesión en las deudas es una característica del hecho de recoger el heredero la soberanía familiar y no de suceder en la misma posición jurídica del difunto.

"El origen de la herencia romana —dice Bonfante— se pierde en la noche de los siglos, en tanto que la idea de que la obligación confiere un derecho sobre el patrimonio, no sobre la persona del deudor, se ha desenvuelto en época histórica" (23).

En suma, la herencia primitiva era la sucesión en la potestad, en el cargo de jefe de esa organización que tenía un carácter marcadamente político, como lo era la familia. Era el subentrar de un jefe por otro, con todos los atributos, las facultades, los derechos y las cargas inherentes a la función.

Pero este concepto de la sucesión en la soberanía familiar, fundamento de la responsabilidad en las deudas atribuida al heredero, fue desapareciendo con el correr de los siglos. La familia perdió su carácter primitivo, desde que sus funciones políticas fueron absorbidas por el Estado. La herencia adquirió un concepto nuevo. Ya no era suceder en el cargo de jefe de la familia, sino recoger el patrimonio del difunto. De aquí que hubo necesidad de encontrarle otro fundamento a esa responsabilidad *ultra vires*.

El jurisconsulto romano decía: El heredero responde de las deudas porque sucede, lo que quiere decir que la herencia no es una simple adquisición de derechos, sino un reemplazo en las relaciones. En cambio, ya el jurisconsulto bizantino, y después de él los demás intérpretes, afirman que se sucede en las deudas porque se adquiere el patrimonio, porque se entra a reemplazar al deudor en la misma posición jurídica que éste tenía.

(23) "Instituciones de Derecho Romano", página 503.

Ha sido el último criterio el adoptado por el Código Civil, como fundamento necesario de la responsabilidad del heredero por las deudas del finado, esto es, por el hecho de suceder en la misma posición jurídica que el causante tenía, como una consecuencia de recoger su patrimonio; noción ésta del patrimonio que comporta decir que el activo y pasivo del de cuius pasan al heredero como en bloque, como un todo.

Bello, en nota al artículo 1219 del Proyecto Inédito dice: "Es un principio de derecho que el heredero es una continuación de la persona del difunto". Queda, por lo mismo, explicado por el propio autor el pensamiento que justifica esta responsabilidad ultra vires.

* * *

¿Cómo se encuentra hoy en día este principio de la responsabilidad?

El principio ha sido objeto de duros ataques, pues la noción de patrimonio no basta para justificar esa responsabilidad personal e ilimitada. Si —como lo afirma Bonfante— "la herencia tiene meramente la función de traspaso del patrimonio del difunto a la persona del heredero, no se debería transmitir al heredero sino el activo, porque patrimonio es solamente lo que sobra, una vez deducidas las deudas" (24).

Se ha sostenido, en apoyo de esta responsabilidad, el de que la solidaridad familiar exige pagar las deudas del finado. Pero se observa, sin embargo, que si los herederos son incapaces deben, por imperio del artículo 1250, aceptar la herencia con beneficio de inventario, hasta el extremo de que si así lo hacen "no serán obligados por las cargas y las deudas de la sucesión sino hasta concurrencia de lo que existiere de la herencia al tiempo de la demanda o se probare haberse empleado efectivamente en beneficio de ellos", de donde resulta que la solidaridad familiar no existe para los herederos incapaces. Además, de que si los hijos no están obligados en vida del padre a pagar las deudas de éste, no se ve la razón para hacerlos responsables de las mismas por la muerte de su progenitor.

Si bien es verdad que el instituto del beneficio de inventario

(24) "Instituciones de Derecho Romano", página 562.

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

591

ha venido en ayuda del heredero, para limitar su responsabilidad hasta concurrencia del valor total de los bienes que ha heredado, lo cierto es que se trata de un medio engorroso, complicado y que constituye una permanente celada tendida al heredero, de difícil aplicación en la realidad. Fornieles, en su "Tratado de las Sucesiones", afirma: "La buena lógica quiere, que fallecida una persona, no se produzca cambio alguno en las relaciones jurídicas existentes entre ella y sus acreedores; que las cosas pasen, en lo posible, y dentro de la esfera patrimonial, como si la muerte no se hubiera producido. En consecuencia, los acreedores del causante no deben tener para cubrirse sino el patrimonio dejado por el deudor, como en vida de éste, y los acreedores del heredero no deben caer sobre ese patrimonio sino una vez liquidado, es decir, descargado de las deudas. El beneficio de inventario y la separación de patrimonios constituirán así la regla, el estado normal, y no excepciones de un principio caducó e inconveniente" (25).

La tendencia de hacer responsable al heredero, en las deudas y cargas de la herencia, sólo hasta las fuerzas del patrimonio que reciba, se abre hoy en día camino en la legislación.

Los Códigos de Brasil, México y Perú, en Latinoamérica, lo establecen. El último tiene dispuesto por el artículo 658, que "el heredero sólo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de ésta", de tal manera que, como lo explica Eugenio Castañeda: "No es necesario para que se produzca la consecuencia prevista en el dispositivo aceptar la herencia bajo beneficio de inventario; la responsabilidad del heredero será siempre limitada (26).

En Argentina, en diversos Congresos de Derecho Civil, se ha discutido ampliamente este problema, lo que está probando la necesidad de pensar en una enmienda del Código Civil de Bello, en esta parte, si ella cabe.

13.—Determinación objetiva del asignatario.—Me parece que es también una de las características del Derecho Sucesoral en el

(25) Fornieles: "Tratado de las Sucesiones", Tomo I, página 137.

(26) Castañeda, Eugenio: "Código Civil", página 183.

Código, el criterio objetivo que adoptó para la determinación del heredero y del legatario.

En Chile, éstos se identifican por la naturaleza de la asignación que el testador hace. Si al sucesor se le deja todo el patrimonio o una cuota-parte del mismo, será heredero, aunque se le denomine por el testador legatario; y, de igual modo, si el de cuius dispone en favor de un asignatario bienes determinados, sea en especie o en género, será un legatario, por mucho que se le llame heredero (artículos 1097 y 1104).

Como decía Bello: "La diferencia entre la herencia y el legado se hace consistir en la naturaleza de la disposición, y no en las palabras materiales que la expresan. Si se dejan a una persona todos los bienes o una cuota de ellos, esta persona es heredero; si una cantidad, especie o género, será legatario. Importa, pues, poco o nada que el testador llame al asignatario de una cuota, legatario, o al asignatario de una cosa singular, heredero. El primero, por la naturaleza de la disposición, es necesariamente heredero, y el segundo, legatario".

"Esto se opone —añadía— a la Ley 14, Título 3, Partida 6, donde se establece que, si alguien es instituido heredero en cosa señalada, y no se nombra heredero de lo demás, lo herede todo; disposición que es una consecuencia de aquel principio fundamental del Derecho Civil, según el cual la sucesión no podía ser parte ex-testamento, y parte ab-intestato" (27).

Resulta, así, que el Código le atribuye un rol limitado a la voluntad del testador en lo tocante a la determinación de la naturaleza o el carácter del asignatario, de manera que le niega la facultad de decidir si se trata de un heredero o de un legatario. El testador ha podido, asignando al sucesor todo el haz hereditario o una cuota-parte del mismo, llamarlo legatario, y no por eso dejará de ser tenido por heredero; igualmente, asignándole bienes determinados, llamar al beneficiario heredero, y no por eso será tenido como tal, pues por la fuerza de la ley el primero será heredero y el segundo legatario.

Pudiera pensarse que lo anterior contradice la regla del artículo 1069, en cuanto por él se dispone que para determinar la inte-

(27) Nota al artículo 2.º del Título I del Proyecto de los años 1841-1845.

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

593

ligencia y efecto de las disposiciones testamentarias "prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada", de donde podría extraerse la conclusión de que si el finado llamó al asignatario heredero, deberá estarse a lo expuesto por aquél. Sin embargo, es útil no olvidar que esa regla dice relación con la interpretación de las palabras o de los términos usados por el testador; pero el rol de esa voluntad resulta limitado cuando se trata de precisar la sustancia jurídica de la asignación y los efectos que la ley le atribuye.

Como lo expresa muy acertadamente Danz, "en las disposiciones mortis causa —como en todos los negocios jurídicos— las palabras han de interpretarse, por lo regular, en el sentido en que suelen usarse entre los profanos, y vulgarmente la palabra "legar" sólo tiene el significado de dejar en testamento, sin aludir para nada a la distinción jurídica entre legado e institución de heredero" (28).

De lo que llevo dicho debe concluirse, que Bello siguió un criterio objetivo en la determinación del asignatario, cuando se trata de la sucesión testamentaria, única en la que es posible que el problema es presente. Se sabe, en efecto, que existen dos sistemas para determinar al heredero: el romano, eminentemente subjetivo, según el cual el heredero es aquel sucesor a quien el testador designa como tal, independientemente de que le deje todo el patrimonio, una parte alicuota del mismo, o solamente una cosa determinada; y el sistema germánico, o moderno, en que el heredero es determinado por la naturaleza de la asignación y no por el nombre que el causante le haya dado en el acto de última voluntad. Nada importa, por este último sistema, que el testador haya llamado o no heredero a quien le deja el todo o una parte alicuota del haz hereditario, ya que el resultado será siempre el de que el beneficiario será tenido como heredero.

Roca Sastre, en sus "Estudios de Derecho Privado", manifiesta que una "consecuencia de la lógica institucional de estos dos sistemas dispares, es que en el romano el heredero ex re certa, cuando no concurre con el otro heredero normal, o sea, sin asignación de cosa determinada, es heredero, pues como prevalece el nomen he-

(28) Danz: "La Interpretación de los Negocios Jurídicos", página 388.

redis sobre la asignatio, aquel título de heres tiene fuerza expansiva para acaparar adquisitivamente todo el haz hereditario, pues entonces las fuentes imponen hacer abstracción de la cosa singular asignada. En cambio, en el sistema germánico o moderno, como prevalece la asignatio sobre el nomen heredis, el instituido heredero en cosa cierta y determinada es considerado legatario" (29).

Si Bello estableció un sistema objetivo o moderno en el Código fué —como lo expresó en la nota más arriba citada—, por la circunstancia de que ya no hay incompatibilidad en morir parte testado y parte intestado, cosa que no era posible por el Derecho Romano, atendida la función asignada al heredero, cual era continuar con el culto y la soberanía familiar, de manera que no podía el heres sacar su derecho de dos llamamientos diversos. Por esta misma circunstancia, se ha podido introducir en el Código el **heredero de cuota**, a quien el causante llama a una parte del haz hereditario: mitad, tercio, quinto, etc.

Esta forma de instituir heredero es en cierto modo contraria al sistema del Derecho Romano, desde que restringe la vocación del sucesor a una cuota determinada del patrimonio, pues la consecuencia natural de la calidad del título de heredero era el derecho a todo el haz hereditario. Si bien es verdad que cuando había varios herederos universales, llamados todos al patrimonio en su integridad, en el hecho llevaban una cuota, tal cosa ocurría por aplicación del aforismo "concurso partes fiunt" —las partes las hace el concurso—. Era una consecuencia de este sistema aquella de que, habiendo varios herederos de cuota, el derecho de acrecer les era acordado, esto es, la misma posibilidad ilimitada de llevarse todo el haz al igual que los universales, como una de las derivaciones del título de heredero que el difunto le daba.

En nuestro Derecho, en que la calidad de heredero no depende del nombre, sino de la naturaleza de la asignación, el instituido en una cuota no puede acrecer las restantes, aunque representa también la persona del causante y le sucede en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, dentro de su cuota. En suma, existe por el Código un heredero al cual le falta la vocación a todo el

(29) Tomo II, "Sucesiones", página 184.

INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO

595

patrimonio del de cuius, a la totalidad de los bienes, cual es el heredero de cuota.

* * *

Ya he tratado, en las explicaciones precedentes, de seguir el pensamiento de Bello en lo que me ha parecido más de esencial en el Derecho Sucesoral chileno.

He tratado, también, de averiguar cómo se encuentran hoy en día alguno de esos principios esenciales.

Pero hay otro aspecto que quisiera recordar, esto es, que el autor del Código no pensaba, de ninguna manera, que la sola obra del cuerpo legal que se elaboraba era bastante para introducir el reinado de la justicia y del sosiego entre las familias, por lo que a la herencia se refiere.

El creía que al legislador le estaba encomendada otra misión más esencial. Decía: "Difunda las luces, estimule la industria, refrene por medios indirectos la disipación y el lujo (pues los medios directos está demostrado que nada pueden) y habrá proveído suficientemente al bienestar de las descendencias. A los hombres en cuyo pecho no habla con bastante energía la naturaleza, no faltarán jamás ni tentaciones ni medios de frustrar las restricciones legales" (30).

¡Expresiones son éstas de una lozanía permanente, cuya actualidad nos podría inducir a creer que han sido dichas en nuestra hora!

* * *

Entiendo que ésta es la última charla de este ciclo que ha organizado el Centro de Derecho de esta Facultad.

Por lo mismo, me parece muy justo —y lo expreso con profunda sinceridad—, que haga llegar mis cariñosas felicitaciones a los alumnos, por la forma tan elevada como han querido celebrar el Primer Centenario del Código Civil y rendir un homenaje a su ilustre autor: Andrés Bello.

Es como si por nuestro intermedio, aprovechando estas festividades de la "Semana Legal", le hubieran dicho: "Venga Ud.

(30) Nota al artículo 5.º del Título VIII, del Proyecto de los años 1841-1845.

también don Andrés Bello a esta fiesta del espíritu y de la juventud, que será nuestro invitado de honor".

Han demostrado, también, un vivo interés por estas charlas, con lo cual han probado su deseo ferviente de aumentar su cultura jurídica, tan necesaria hoy en día en el ejercicio de nuestra profesión. Yo, personalmente, les digo que estoy muy agradecido que hayan solicitado mi cooperación, y que hayan insistido en ella, para este homenaje al Código Civil y a su autor, Andrés Bello. Será, sin duda alguna, el mejor honor de mi vida de profesor dentro de estas aulas.

Quiero decirles, igualmente, si me es permitido desde la situación en que me encuentro, que debemos recordar también a todos aquéllos que colaboraron en la obra del ilustre venezolano, porque si bien la intervención de Bello fué preponderante en la elaboración del Código Civil, de manera que "tendrá siempre la gloria de haber sido el legislador de una República", la verdad es que no debemos olvidar demasiado, entre otros, los nombres de José Alejo Valenzuela, de José Gabriel Ocampo, de Manuel Antonio Ticornal, de José Miguel Barriga, de Ramón Luis Irarrázabal y de Antonio García Reyes, que formaron la Comisión Revisora del Proyecto de 1853. Esto no amengua en nada el bien ganado pedestal de Andrés Bello en el corazón de esta Patria agradecida.

Y por último, como lo recordaban días atrás los profesores señores Tapia y León desde esta misma tribuna universitaria, debo expresar que el Código de Bello requiere de ciertas modificaciones y reajustes; pero que ellos se hagan conservando nuestras tradiciones, nuestras costumbres, para no hacer una obra que, por novedosa, resulte inaplicable a nuestro medio ambiente.

Que se hagan, en su hora, recogiendo del pasado todo lo que sea justo, como lo hizo Bello, porque, tal cual lo expresó el docto José Irureta Goyena: "Un país que corta sus amarras con el pasado, es un país que se muere una vez en cada generación, que empieza y no continúa, que se olvida de lo que iba diciendo, que vive sólo en el presente, que es la manera de no haber vivido nunca y de no llegar a vivir jamás".